

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 14º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-24358-2015
CARATULADO : ESPINOZA / COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE
CHILE COPEC S.A.

En Santiago, a nueve de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece don Héctor Gaspar Palacios Maray, abogado, domiciliado en V. Mackenna 322, San Carlos, en representación judicial de don Renentine Antonio Espinoza Aravena, chofer, domiciliado en sector Fundo Itihue, comuna de San Carlos, deduciendo demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A., representada por su gerente general Lorenzo Gazmuri Schleyer, ingeniero civil eléctrico, domiciliado en calle Agustinas 1382, Santiago, en virtud de los fundamentos de hecho y de Derecho que pasa a exponer.

Sostiene que consta en documento que acompaña que en los autos penales RUC 1319918877-K, de la Fiscalía Local de San Fernando, RIT N° 2340-2013 del Juzgado de Garantía de San Fernando, fue condenado don Christian Mauricio Mena Rojas, por uso fraudulento de tarjeta de crédito.

Explica que el uso malicioso de instrumento privado mercantil fue en razón de que la empresa COPEC Chile de San Fernando, domicilio Los Aromos sin número, entregó a Christian Mauricio Mena Rojas dos tarjetas de crédito COPEC, asociadas a las patentes UH-5192 y EU-8675, las cuales estaban destinadas al uso de su representado, sin la debida autorización de su persona. El referido uso malicioso alcanzó la suma de \$5.060.209.

Indica que su representado tomó conocimiento de la entrega de las tarjetas por parte de COPEC en cuanto estas no le llegaron a él, requiriendo al ejecutivo de aquella, señor Roberto Rojas Guerrero, unas nuevas. Así, se extendieron otras tarjetas asociadas a cada uno de los camiones. Sin perjuicio de que COPEC sabía



que él no había hecho uso de las mismas, procedió al cobro del valor mal usado por don Christian Mauricio Mena Rojas, correspondiente a la suma ya indicada; lo cual se conoce aún en los autos RIT C-34-2014 del Juzgado de Letras y Familia de San Carlos.

Reitera la falta de debida autorización de su representado a COPEC para la entrega de las tarjetas, conforme a la obligación contenida en el contrato de apertura de crédito, y expresa que no obstante conocer aquella el cobro indebido – por no tener su representado las tarjetas en su poder-, procedió a ejercer la acción de cobro. Esto conllevó a que él apareciera en el sistema financiero con información comercial por incumplimiento, lo que implicó directamente un perjuicio al no poder desarrollar su actividad normal de transportista, conforme detalla.

Acusa que, si bien el daño provocado es irreparable, no es menos cierto que COPEC debe indemnizar a su representado los daños que le ha provocado al proceder a la entrega indebida de dos tarjetas de crédito (incumplimiento contractual), que devinieron en tratar de acreditar su inocencia por más de dos años en sede penal, el cobro indebido de tarjetas, de caer en estado depresivo, de no cumplir con sus obligaciones familiares y problemas familiares.

Acota que la indemnización debería alcanzar una suma no menor de \$125.000.000, desglosándose del siguiente modo:

- Lucro cesante por \$50.000.000, en virtud de no poder realizar la labor normal de transporte, al no poder contar con los medios para adquirir combustible para cumplir sus compromisos, contratar los servicios a terceros. Ello, por no tener crédito ni para la antedicha adquisición de combustible ni para hacer pagos de reparaciones a los camiones con que realiza sus actividades. Agrega que perdió incluso la confianza de las personas que le podían facilitar recursos para realizar su actividad laboral, lo cual implicó una pérdida considerable de sus ingresos desde la fecha en que COPEC lo incluyó en el sistema de información comercial, llevándolo incluso a no poder pagar otras obligaciones bancarias que cumplía con normalidad con anterioridad a tal hecho.
- Daño emergente en cuanto por la falta de recursos no pudo realizar adecuaciones a los vehículos que usaba para realizar la labor de transportista, devaluándose considerablemente aquellos. Valoriza esta partida en a lo menos \$5.000.000.



- Daño moral, al que se refiere indicando que sin perjuicio de la acción indebida de COPEC en el cobro de más de \$5.000.000, al caer en falencia por no cumplir sus obligaciones, su representado cayó en un estado de estrés y depresión personal y familiar muy profundo. Por ello concurrió al psicólogo tanto personalmente como con su familia. Ahonda sobre el estado emocional que le produjeron los hechos.

Sostiene que aunque no existe valor de reparación por este concepto, demanda una suma de a lo menos \$70.000.000.

De acuerdo a lo expuesto y a lo dispuesto en los artículos 2329, 1556, 1548, 1549 y 1560 del Código Civil, artículo 254 del Código de Procedimiento Civil y demás disposiciones legales que correspondan, solicita tener por deducida demanda de indemnización de perjuicios en contra de COPEC Chile, ya individualizada, acogerla a tramitación y en definitiva resolver que COPEC Chile debe pagar a su representado la suma de \$125.000.000, por los conceptos ya detallados, o la suma que se determine en conformidad al mérito de autos, con costas.

A fojas 15 rola notificación por cédula de la demanda y su proveído a don Lorenzo Gazmuri Schleyer, en representación de COPEC Chile S.A.; practicada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

A fojas 32 comparece don Ramiro Méndez Urrutia, abogado, Asesor Legal de la Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. (COPEC), y en su representación, ambos domiciliados en Santiago calle Agustinas N° 1382, contestando la demanda deducida en autos en contra de su representada, solicitando su rechazo en todas sus partes, con costas, por las razones de hecho y derecho que pasa detallar.

Primeramente, reseña los antecedentes del libelo de su contraria, indicando que el demandante sostiene que su parte debe indemnizarle los perjuicios que le habría ocasionado el protesto de un Pagaré por la suma de \$5.060.209, que correspondería al total del uso fraudulento de una tarjeta de crédito que se habría entregado a un empleado del señor Espinoza sin su autorización.

Dentro de tales antecedentes, precisa que reconoce el demandante haber suscrito con Copec un contrato mediante el cual su representada se comprometió a entregar petróleo diesel para los camiones de la demandante, para la cual hizo



entrega de dos tarjetas denominadas Tarjetas Copec Transporte, en adelante e indistintamente TCT. Reconoce igualmente, que las tarjetas fueron retiradas por don Christian Mauricio Mena Rojas, en la Planta San Fernando de su representada, omitiendo señalar que el señor Mena Rojas era su empleado.

Postula que la demanda en los términos planteados deberá desestimarse ya que su representada no ha obrado negligentemente, ni tiene responsabilidad en los supuestos perjuicios sufridos por el actor.

Manifiesta que su representada, contrariamente a lo que sostiene la demandante, ha cumplido fielmente con las obligaciones que le impone el contrato y su actuar se encuentra dentro de los términos de la relación contractual que unía a las partes.

En efecto, describe que entre las partes, ambas personas que se dedican al comercio, plenamente capaces, que participan en el mercado del transporte y en el comercio del país, se suscribió con fecha 16 de mayo de 2013 un contrato de Apertura de Crédito, un contrato Reglamento de Uso de la Tarjeta Copec Transporte, Anexo "A" y un Pagaré.

Destaca que estos documentos no difieren en esencia a los que se usan comúnmente en el mercado, tales como los otorgados por las otras compañías distribuidoras de combustibles, por compañías emisoras de tarjetas de crédito, bancos y demás instituciones financieras. Es más, su contenido es prácticamente idéntico al que utiliza Mobil en el resto del mundo para este tipo de transacciones.

Señala que de acuerdo con el Reglamento de Uso de la TCT, el cliente es responsable y se asegurará que los comprobantes y las guías de despacho, según corresponda, reflejen fielmente cualquiera y todos los suministros cargados a la Tarjeta (cláusula quinta). Asimismo, el cliente es responsable principal ante Copec por todos los consumos efectuados y/o servicios que le fueren prestados mediante el uso de sus Tarjetas Copec Transporte nominativas o para vehículos, incluyendo todas las renovaciones de las mismas, conforme a la cláusula sexta.

Finalmente, plantea conforme a lo dispuesto en la cláusula novena que salvo aviso dado por escrito a Copec, el cliente será responsable y pagará todos y cada uno de los suministros de productos y/o servicios cargados por el uso de las Tarjetas Copec Transporte, aún cuando un vehículo ya no pertenezca a los vehículos registrados o a un usuario autorizado ya no lo esté, o las adquisiciones



hayan sido incurridas por una persona que, en el momento de la entrega y cargo, no haya sido un usuario autorizado, o la entrega y cargo no hayan sido incluidos con respecto a los productos y/o servicios o con respecto a un vehículo registrado en particular o cualquier vehículo registrado.

Ahora bien, reseña que de acuerdo con sus antecedentes, Renentine Espinoza Aravena fue creado como cliente TCT el 16/05/2013. Las dos tarjetas emitidas para sus dos vehículos patentes EU-6675 y UH-5192 se emitieron también el día 16/05/2013. Posteriormente, para las mismas patentes se emitieron tarjetas de reposición el día 30/05/2013.

Refiere que las primeras tarjetas emitidas fueron enviadas a Planta San Fernando, para que el ejecutivo de venta de la zona, en esa fecha Roberto Rojas, las entregara en la oficina del cliente. Según los antecedentes existentes, estas fueron entregadas al Sr. Cristian Mena, RUT 13.347.872-8, a esa fecha empleado del señor Espinoza, según consta en copia de declaración jurada.

Agrega que las primeras tarjetas asociadas a las patentes EU-6675 y UH-5192, presentaron consumos de P. Diesel entre los días 20 de mayo y 26 de mayo de 2013.

Pormenoriza que asociadas al vehículo patente EU-6675 se realizaron ocho transacciones con tarjeta TCT entre los días 20 y 26 de mayo. Los litros totales asociados a estos consumos fueron 4.161,28, equivalentes a un monto de \$ 2.498.509.

Con respecto al vehículo patente UH-5192, añade que se efectuaron nueve transacciones con tarjeta TCT entre los días 20 y 26 de mayo. Los litros totales asociados a estos consumos fueron 3.958,39, equivalentes a un monto de \$ 2.559.657.

Precisa que las diecisiete transacciones asociadas a los dos vehículos, entre los días 20 y 26 de mayo, se realizaron en sólo dos estaciones de servicio Copec: EDS 60334, ubicada en San Fernando, Av. B. O'Higgins esquina M. Velasco y EDS 60076 ubicada en San Fernando, Panamericana Sur Km. 126,8.

Expresa que si bien es cierto el cliente presentó un reclamo respecto de los consumos incluidos en la factura N° 650484 por un monto total de \$ 5.060.209, asociada a los diecisiete consumos realizados por las dos tarjetas mencionadas entre



los días 20 y 26 de mayo de 2013, este no fue aceptado por motivos de que no se pudo comprobar que los vehículos no estuvieran presentes en la estación a la hora de las cargas y además que la persona que utilizó las tarjetas, Sr. Cristian Mena, no fuera empleado de la empresa del señor Espinoza.

Por esta razón, refiere que la oficina comercial respondió vía mail al señor Renentine Espinoza que su reclamo no procedía y que de no pagar la factura adeudada se procedería a llenar el pagaré N° 21523, en garantía para su protesto en notaría, y posterior envío a cobranza judicial, lo cual se hizo.

Con respecto al señor Cristian Mena, dice que existe una declaración jurada suya ante notario respecto de que él era conductor contratado de la empresa de Renentine Espinoza Aravena, la cual incluyó la aseveración de que las cargas reclamadas por el señor Espinoza sí se hicieron en los dos camiones de su empresa.

Agrega que respecto a las copias de las guías de despacho conseguidas, en diez de ellas de las doce disponibles aparece el RUT del señor Cristian Mena como conductor del vehículo que carga.

Respecto de esto último, hace presente que el actor contractualmente se obligó por los actos de terceros, asumió la responsabilidad del porte, custodia y uso de la tarjeta que hiciera él o sus dependientes y se obligó a pagar los consumos facturados conforme al procedimiento establecido en los documentos antes citados. Más aún y en el evento de no haberse establecido un procedimiento para facturar en el cual el actor pudiere reclamar de lo facturado, de acuerdo con las normas generales de derecho, establecidas respecto de la compraventa comercial, no reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada, conforme lo señala el inciso segundo del art. 160 del Código de Comercio. De los antecedentes que obran en su parte y que se acompañarán, el actor reclamó de las facturas emitidas por Copec meses después de su otorgamiento.

De acuerdo con los contratos que el actor ha señalado haber suscrito, destaca que en la cláusula décima del Contrato de Apertura de Crédito TCT se señala textualmente lo siguiente: "En caso de robo o extravío de la Tarjeta Copec Transporte, el cliente está obligado a dar aviso de inmediato telefónicamente a Copec a los teléfonos y lugares publicitados por ella, quien procederá a bloquear computacionalmente la tarjeta, otorgando un código para dicho efecto, debiendo el cliente ratificar dicho aviso por escrito a Copec dentro de las 24 horas siguientes.



En caso de no dar cuenta o hasta la recepción del aviso en su caso, del robo o extravío de la Tarjeta Copec Transporte, el cliente responderá del mal uso que pudiere ser objeto la tarjeta".

Respecto del mal uso de las tarjetas, indica que su representada estableció en la cláusula octava del contrato de Depósito y Administración TCT, suscrito entre Copec y los concesionarios, que antes de que se hiciera uso de la tarjeta el personal de la Estación de Servicio debe validar la autenticidad, verificando entre otros aspectos: a) Que la patente registrada en la Tarjeta Copec Transporte corresponda al vehículo que va a cargar; b) Que la tarjeta sea auténtica; y c) Consultar la vigencia en el terminal computacional o boletines de seguridad publicados por Copec.

Razona que lo anterior demuestra que su representada ha definido controles de seguridad en el uso de las tarjetas, los que se respetaron en este caso.

Invoca que todo contrato válidamente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales; y que en el presente caso el actor quiere dejar sin efecto el contrato válidamente celebrado con Copec por una causal distinta de las antes señaladas.

En efecto, sostiene que el actor no solo no dio aviso oportuno del hurto o robo que se le hizo de la tarjeta sino que ella se utilizó hasta que su representada formuló los primeros cobros.

Asevera que su parte cumplió íntegramente con las obligaciones que asumió sin que hasta la fecha obtenga beneficio alguno.

Cita el artículo 1440 del Código Civil.

A continuación, esboza que atendida la inexistencia absoluta del hecho dañoso que imputa el actor, ningún daño resarcible puede reclamar en contra de su representada. En efecto, el daño, en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, debe cumplir con ciertas características que no concurren en las exigencias pecuniarias que formulan los actores en la especie; teniendo ningún fundamento su pretensión.

Explica que el daño indemnizable debe ser cierto, propio y directo.



Decreta también que estamos en presencia de una mera estimación, que no tiene ningún parámetro serio de determinación, en cuanto al daño.

Afirma también la falta de relación de causalidad o nexo causal, diciendo que no hay no posibilidad de imputar o reprochar conducta dolosa o culposa a su representada. Por esto, junto con la inexistencia de daño indemnizable, el análisis del nexo causal resulta inoficioso.

Acusa que resulta del caso señalar que quién utilizó las tarjetas de crédito CTC fue un empleado del demandante; que lo hizo en vehículos del demandante; que el demandante jamás pagó a Copec los consumos de combustibles, ya que fue absuelto de ello por una Corte de Apelaciones, quién declaró que la obligación era nula, ya que el acto perpetrado del uso de las tarjetas de crédito Copec fue cometido fraudulentamente por un tercero.

Concluye que si alguien debe indemnizar al demandante es su ex empleado, don Christian Mena Rojas.

Finalmente, niega que por el protesto del pagaré a instancias de su representada signifique que no pudiese ejercer sus acciones normales de transportista, y que esa sea la causa para aparecer en el sistema financiero. Lo cierto es que el protesto de Copec se realiza el día 8 de agosto del año 2013. A esa fecha el demandante ya registraba dos protestos en los informes comerciales por cheques por más de diez millones de pesos, protestados con fechas 23 de mayo y 3 de junio de 2013.

En mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en los artículos 1438, 1445 y siguientes, 1545 y siguientes, 1698 y siguientes, 2320 y 2322 todos del Código Civil, 160 y 241 del Código de Comercio, 11 de la Ley 18.092 y artículos 309 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ruega se tenga por contestada la demanda y en definitiva se rechace en todas sus partes, con costas.

Luego, tanto los trámites de réplica como de dúplica fueron evacuados en rebeldía, conforme a lo resuelto a fojas 44 y 46, respectivamente.

A continuación, a fojas 54 rola acta de audiencia de conciliación, celebrada con la asistencia de los apoderado de ambas partes. No obstante, llamadas las partes a conciliación, esta no se produce.



A fojas 55 se recibe la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales debe recaer la misma.

A fojas 56 y 57 constan estampados receptoriales de notificación de la antedicha sentencia interlocutoria, a la demandada y a la demandante, respectivamente.

Transcurridos los términos legales pertinentes, a fojas 375 (191) se cita a las partes a oír sentencia.

EN RELACIÓN Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Héctor Gaspar Palacios Maray, en representación de don Renentine Antonio Espinoza Aravena, interponiendo demanda de indemnización de perjuicios en contra de Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A., representada por su gerente general Lorenzo Gazmuri Schleyer, conforme a los argumentos reseñados en la parte expositiva. El actor omite indicación de si basa su demanda en el estatuto contractual o extracontractual de responsabilidad, efectuando enunciación de las normas de ambos.

SEGUNDO: Que, habiendo sido legalmente emplazada la demandada, Compañía de Petróleos de Chile S.A., ésta compareció contestando la demanda, solicitando el íntegro rechazo de la misma, por los motivos que expresa, y que fueron referidos precedentemente.

TERCERO: Que, en relación a la prueba rendida, dentro de los documentos que acompañó el demandante constan los siguientes, no objetados por su contraria:

1.- Copia autorizada de Acta de Audiencia de Preparación de juicio oral con procedimiento abreviado, de fecha 20 de abril de 2015, correspondiente a causa RUC N° 1310018877-K, RIT N° 2340-2013 del Juzgado de Garantía de San Fernando.

En la misma, en que figura como víctima don Renentine Antonio Espinoza Aravena, se condena al imputado Christian Mauricio Mena Rojas como autor del delito de uso fraudulento de tarjetas de crédito.

Figura anotado certificado de ejecutoriedad de la resolución antedicha, de fecha 20 de abril de 2015.



2.- Copia simple de piezas de causa RUC N° 1310018877-K, RIT N° 2340-2013.

Dentro de ellas se encuentra: (i) querella incoada por don Renentine Antonio Espinoza Aravena en contra de Christian Mauricio Mena Rojas, por delito de apropiación indebida, uso malicioso de instrumento privado y estafa; (ii) factura electrónica N° 650484 emitida por Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. –Tarjeta COPEC Transporte-, emitida con fecha 31 de mayo de 2013, a nombre de Renentine Antonio Espinoza Aravena; (iii) correo electrónico de Roberto Rojas, de fecha 30 de mayo de 2013, mediante el cual se solicita bloquear por extravío dos tarjetas de don Renentine Antonio Espinoza Aravena, asociadas a las patentes EU.6675 y UH.5192; (iv) Informe policial N° 2252/00818 de fecha 02 de agosto de 2013 practicado por la Brigada de Investigación Criminal de San Fernando de la Policía de Investigaciones de Chile y remitido a la Fiscalía Local de San Fernando, además de la constancia de otras diligencias investigativas.

3.- Certificado emitido por psicólogo Francisco Vera Castro, con fecha 20 de septiembre de 2017, en el que da cuenta de haber atendido profesionalmente a don Renentine Espinoza Aravena, desde finales del mes de julio hasta septiembre de 2013. Lo anterior, por *trastorno adaptativo reactivo a situación de estrés por estafa, vinculado a empresa Copec*.

Agrega que en la entrevista para desarrollar el informe en comento, observa que don Renentine continúa con cuadro adaptativo crónico, y que sintomatología es de moderada a severa; conforme describe.

CUARTO: Que asimismo, a fojas 318 y siguientes figura agregada al proceso acta en que consta recepción de prueba testimonial de la demandante, en la cual declararon los testigos comparecientes y singularizados en nómina presentada al efecto por dicha parte.

En primer lugar, depone don Sergio Hernán Ortega Rodríguez, quien interrogado conforme al punto de prueba de marras, replica que es efectivo que al demandante se le han causado múltiples perjuicios por lo sucedido, precisando que, principalmente, el perjuicio es de origen económico, ya que la tarjeta COPEC Combustible fue entregada a otra persona, la cual hizo gastos de combustibles en más de \$5.400.000. Agrega que este dinero se le cobró a la demandada judicialmente, con los consecuentes perjuicios para el señor Espinoza. Además, tuvo daño moral por la preocupación que le implicó, hasta tratarse psicológicamente.



Tuvo también problemas de tipo familiar ya que incluso se puso a tomar trago, porque quería evadirse de este problema, lo que implicó que su gremio de transporte y gente que lo conocía –él incluido-, tuvieron que ayudarlo a tratarse; con psicólogo, a parar la olla, a darle trabajo y algo de dinero para mantener la casa. Explica que se le consiguió otro tipo de trabajo, hojalatero, ya que su actividad como transportista no pudo realizarla por estos hechos, teniendo todos los créditos bancarios cerrados por estar en DICOM. El protesto del pagaré por parte de Copec Chile conllevó no haber podido realizar ninguna actividad de carácter comercial.

Añade que como no pudo seguir trabajando incluso tuvo que vender sus dos camiones –en \$25.000.000-, por lo que dejó de percibir como dinero mensual aproximadamente \$1.000.000., desde la fecha del protesto del pagare de Copec.

Avalúa los daños señalados en más de \$100.000.000.-.

Enseguida, declara don Jaime Delvalle Baeza, quien consultado acerca del punto de prueba fijado en autos, sostiene que el señor Espinoza sufrió hartos perjuicios, morales, económicos, dejó de ganar mucho dinero por no poder trabajar sus camiones y haberlos tenido que vender y su imagen fue perjudicada; no le dieron ningún crédito bancario por estar en DICOM debido a este problema. Expresa pertenecer al gremio de transportista y que varios asociados le ayudaron, conforme detalla, porque ya no tenía camiones. Indica que todo esto le ocurrió porque le entregaron a otra persona la tarjeta COPEC Combustible, y esa persona le dejó una deuda de más de \$5.000.000, cobrándosele al señor Espinoza el pagaré que había firmado para que le dieran la referida tarjeta. Acusa que fue otra persona la que hizo los consumos.

Afirma que antes de lo ocurrido su vida era normal, cumplía sus obligaciones y trabajaba bien, ganando mensualmente con sus camiones más de \$1.000.000. Agrega que andaba en buen estado de ánimo, compartía socialmente, realizaba su actividad de transporte con alegría. Luego, cayó en estado de depresión con problemas familiares, debiendo concurrir a tratamiento psicológico. También se dedicó a beber por lo que el gremio al que él pertenece debió ir en su ayuda. Moralmente, su perjuicio no puede ser avaluado en más de \$75.000.000, y dejó de percibir desde el año 2013 más de \$ 1.000.000 mensuales. Asimismo, tener que dejar de trabajar y vender sus vehículos conlleva una pérdida no menor a \$ 25.000.000.



En tercer lugar, comparece doña María Soledad Ramírez Campos. Preguntándosele conforme al punto de prueba fijado en la causa, manifiesta que conoce desde hace muchos años al señor Espinoza, viviendo al frente de él, en el mismo sector en San Carlos, y que ha presenciado el sufrimiento y dolor que a éste le ha significado el problema con la Tarjeta Copec Combustible. Explica que se la entregaron de COPEC equívocamente a otra persona, sin autorización del señor Espinoza, lo que la causó muchos perjuicios. Refiere que esa persona se puso a consumir petróleo y se lo cargaban a la cuenta del señor Espinoza, gastando más de \$5.400.000. Ante el no pago de esa suma, porque no le correspondía al señor Espinoza, le protestaron el pagaré que respaldaba el pago de la tarjeta Copec Combustibles. Lo demandaron judicialmente, quedó en DICOM, no pudo solicitar créditos bancarios por este tema y le cerraron las cuentas bancarias. Por esa razón tuvo sufrimiento psicológico, estando con psicólogo por largo tiempo, pero después no pudo seguir pagando, se cayó al trago, y esto le causó los perjuicios que ha detallado. Afirma que ello ha implicado no poder trabajar, dejar de ganar más de \$1.000.000 mensuales que tenía antes de este problema, y que perdiera los camiones ya que debió venderlos a bajo precio, por faltarle dinero para lo básico; sin perjuicio de que muchos que lo conocían le tuvieron que ayudar, conjuntamente con personas del gremio del transporte.

Señala que como daño directo es más de \$5.400.000, más interés. Avalúa los perjuicios en su totalidad en \$115.000.000, ya que aquel sufrió mucho y fue perjudicado injustamente.

QUINTO: Que en virtud de solicitud del actor, se designó perito psicólogo a fin de *establecer el daño moral psicológico* acaecido a don Renentine Antonio Espinoza Acevedo, por la ocurrencia de los hechos de autos, y su efecto en su estado anímico a la época de decretarse la probanza.

En razón de aquello, don Marco Aguilar Cerpa, perito nominado al efecto, acompañó el Informe Pericial Psicológico que le fue encomendado; el cual es habido a fojas 361 de la causa.

A través del mismo concluye que el examinado *se encuentra afectado de un trastorno ansioso depresivo en remisión, pero que en su momento más álgido fue devastador, dejando huellas evidentes en su vida y de su grupo familiar, con un deterioro significativo*. Deriva tal daño de *la mala gestión de la demandada en*



cuanto a dos tarjetas que emitió y entregó de manera negligente a un tercero, quien hizo uso malicioso de la misma.

SEXTO: Que, por su parte, la demandada acompañó los siguientes instrumentos en parte de prueba, no objetados por su contraria:

- 1.- “Informe Platinum” de fecha 27 de mayo de 2016, correspondiente a don Renentine Antonio Espinoza Aravena. Registra 23 deudas impagas, por un monto total de M\$52.468.
- 2.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el Registro de Vehículos Motorizados respecto del vehículo placa patente EU.6675-5, de propiedad de Renentine Antonio Espinoza Aravena.
- 3.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el Registro de Vehículos Motorizados respecto del vehículo placa patente UH.5192-7, de propiedad de Renentine Antonio Espinoza Aravena.

SÉPTIMO: Que en virtud de las pruebas rendidas en autos, en particular la copia de Contrato de Apertura de Crédito con sus anexos, celebrados entre don Renentine Antonio Espinoza Aravena y Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. –documentos que son habidos dentro de las piezas de la causa RUC N° 1310018877-K, RIT N° 2340-2013, aparejadas al proceso-, en relación a las pretensiones planteadas en el libelo de demanda, se desprende que la presente causa se enmarca dentro del estatuto de responsabilidad contractual, el cual se regula en los artículos 1545 y siguientes del Código Civil, Título XII del Libro IV, denominado *Del efecto de las obligaciones*.

OCTAVO: Que habiéndose asentado lo anterior, cabe indicar que en virtud del ya referido “Contrato de Apertura de Crédito” celebrado entre las partes sub lite, con fecha 30 de abril de 2013, se acordó la apertura de una línea de crédito, a fin de permitir al cliente hacer uso de la “Tarjeta Copec Transporte”. Se hace presente que no se consigna el monto al que asciende la acordada línea de crédito, en tanto no fue como llenada dicha mención, figurando solo un renglón en blanco.

Asimismo, conforme a la cláusula segunda de la convención en comento, *“La o las compras que se hagan con cargo a la línea de crédito señalada, podrán ser efectuadas por el cliente directamente, mediante el uso de la “Tarjeta Copec*



Transportes” , o por otras personas, o para los vehículos especialmente autorizados por éste, y para los cuales se ha solicitado expresamente las “Tarjetas Copec Transportes” .

Adicionalmente, el “Contrato Reglamento de Uso de la Tarjeta Copec Transporte” , que constituye documento anexo al contrato antes singularizado – también parte integrante de los documentos de la causa penal cuyas piezas fueron acompañadas-, dispone en su cláusula primera que *“Se deja constancia que el cliente ha recibido la tarjeta a su entera satisfacción. La tarjeta entregada puede ser personal e intransferible, vale decir, solo puede ser utilizada por la persona o usuario autorizado que se indica en la Tarjeta, o al portador, en el caso que esta última sea signada a un vehículo, y, en todos los casos, constituye una credencial que habilita al cliente para adquirir Petróleo Diesel y/o los bienes y servicios que Copec pudiere incorporar en el tiempo, en cualquiera de las Estaciones de Servicio afiliadas al sistema Tarjeta Copec Transporte que opera en el país.*

Las tarjetas de carácter personal e intransferible solo podrán ser utilizadas por su titular, en tanto que las asignadas especialmente a un vehículo son al portador y sólo pueden utilizarse en el abastecimiento del vehículo singularizado en la tarjeta.

(...) Un representante autorizado del cliente firmará las Tarjetas Copec Transporte en el momento de recibirlas” .

De las copias de las tarjetas acompañadas se observa que éstas tienen indicación expresa de un vehículo cada una –los camiones placa patente UH.5192 y EU.6675-, además del nombre del demandante. En dicho sentido, serían al portador, mas solo pueden utilizarse para cargar el camión respectivo.

Asimismo, más allá de los dichos de las partes, no obra en el proceso la anotación de recepción de las primeras tarjetas emitidas por parte de personero del actor, como tampoco autorización conferida por éste al efecto. Por cierto, tampoco consta que el actor haya recibido las mismas, en forma personal.

NOVENO: Que, luego, en la cláusula quinta del citado anexo correspondiente a “Contrato Reglamento de Uso de la Tarjeta Copec Transporte” , las partes convinieron que al *“solicitar la adquisición de Petróleos Diesel u otros bienes elegibles en conformidad al presente contrato, el Cliente o los usuarios autorizados deberán identificarse con su Cédula Nacional de Identidad y entregar la*



tarjeta para su examen y confrontación de datos. La tarjeta les será devuelta luego de que procedan a firmar el correspondiente comprobante.

(...) Sin perjuicio que la Tarjeta Copec Transporte presentada por el usuario autorizado esté aparentemente en orden, el concesionario autorizado podrá siempre verificar el número de patente del vehículo registrado que aparece en la Tarjeta Transporte y velar para que las compras cargadas a una Tarjeta Copec Transporte sean para el beneficio del vehículo registrado, cuya patente aparece en dicha Tarjeta Copec Transporte.

El cliente será responsable y se asegurará de que el comprobante y la Guía de Despacho, según corresponda, reflejen fielmente y cualquiera y todos los suministros y servicios cargados a esta tarjeta.

Con todo, las partes convienen que la suma adeudada será la que certifique Copec, sobre la base de los montos adeudados que figuren en el sistema computacional del acreedor y en los comprobantes que se emitan en cada operación” .

DÉCIMO: Que resulta preciso explicitar un par de aspectos que se desprenden de los antecedentes de marras.

Primeramente, cabe señalar que no obstante indicarse bajo la rúbrica del “cliente” en el Contrato de Apertura de Crédito y sus Anexos, que ésta es “por poder” del mismo, sin mayor indicación al efecto, el actor no ha desvirtuado el hecho de que celebró el contrato referido. Solamente niega haber recibido las primitivas tarjetas emitidas, como también el haber facultado a un tercero para su recepción.

En segundo término, en razón del correo electrónico remitido por don Roberto Rojas, representante de ventas de Copec, instruyendo el bloqueo y re-emisión de las tarjetas, a través de nuevos ejemplares, diligenciado ante solicitud de don Renentine Espinoza, se denota que tales actuaciones son pedidas con motivo del extravío de las tarjetas inicialmente emitidas.

Sobre este último punto, en relación a la aplicación de la Ley N° 20.009, que “Limita la Responsabilidad de los Usuarios de Tarjetas de Crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas” , habrá de señalarse que en virtud del aviso de bloqueo a Copec -que habría tenido lugar el



30 de mayo de 2013-, conforme al artículo primero de dicha norma, el tarjetahabientes limita su responsabilidad ante el uso de la tarjeta en cuestión, a contar de esa data. Ello, sin perjuicio de que las operaciones invocadas en autos se habrían llevado a cabo con anterioridad a aquella notificación.

UNDÉCIMO: Que como parte de la causa penal acompañada, figuran dos comprobantes de compraventa de diesel, correspondientes a la copia de la Estación de Servicio situada en O' Higgins esquina M. Velasco, San Fernando. Uno de ellos es respecto de la patente EU.6675 y el otro respecto de la placa UH.5192.

En relación a las operaciones de carga de combustible efectuadas en la Estación de Servicio de ruta Panamericana, San Fernando, no es posible revisar los comprobantes respectivos y cotejarlos con los demás antecedentes de la causa, en tanto figuran agregados como parte de la investigación penal, mas ilegibles por la calidad del escaneo e impresión.

Sin perjuicio de lo anterior, de los testimonios consignados en la investigación policial de la aludida causa criminal puede desprenderse cuál fue el actuar de Copec ante ventas en que se utilizó la Tarjeta de Crédito otorgada por dicha entidad.

DÉCIMO SEGUNDO: Que en la línea de lo anterior, en declaración voluntaria de don Felipe Andrés Muños Cornejo y de don Matías Alfredo Ramírez Palma, habidos en la señalada investigación, indican, en su calidad de atendedores de Copec, en relación a las ventas mediante TCT (tarjetas de control de transporte) que *en rara ocasión se verifica si la tarjeta corresponde efectivamente a la patente asociada al camión que llega a cargar combustible.*

Por otro lado, don Pablo Andrés González Saavedra, en la misma calidad de los precedentes testigos, asevera que los boucher que se le exhiben –referentes a los hechos de autos y de la causa criminal asociada, y que contarían con su RUT como empleado que practicó la operación- no los extendió él, en cuanto firmaba cada documento que pasaba por sus manos, y que está seguro que se mal utilizó su RUT para abastecer de combustible; lo que califica como maniobra muy común entre los trabajadores de Copec. Respecto de esto último coinciden los dos testigos antes citados.

A su vez, dice que él no entró en el juego de robar combustible pero que sí vio muchas veces como se llenaban bidones con petróleo que luego eran



retirados por vehículos o camionetas. Involucra en dichas prácticas al jefe de apellido Farfán.

Deponiendo también este último, cuyo nombre completo es Ernesto Antonio Farfán Fierro, niega los hechos que se le imputan y afirma que él siempre chequea las patentes con los camiones que se cargan. Detalla el procedimiento de venta con pago mediante las tarjetas TCT. Exhibiéndosele un boucher asociado a las ventas de autos, con su RUT, manifiesta que olvidó firmarlo, aunque él es encargado de que se cumpla con tal formalidad por los atendedores.

Por su parte, mediante declaración en esa misma sede, don Roberto Alejandro Rojas Guerrero, quien se desempeñaba como ejecutivo de ventas para Copec, reconoce haber efectuado la entrega de las tarjetas correspondientes a don Renentine Espinoza a don Christian Mena Rojas; conforme detalla.

DÉCIMO TERCERO: Que, además, se entrevistó por la Policía de Investigaciones en el contexto de la causa penal que ha sido reiteradamente citada, a los dos atendedores que efectuaron las ventas de autos en la sucursal de Copec de Manso de Velasco; don Mauricio Reinaldo Pavez Becerra y don Eduardo Mauricio Núñez Núñez. Ambos confirman haber efectuado tales operaciones, en las cuales les fue requerido llenar bidones, en vez del estanque del camión respectivo, aduciendo estar los vehículos a cargarse en panne, en un lugar diverso a la estación de servicio. Todo esto, conforme cada uno de ellos pormenoriza.

Asimismo, el señor Pavez informa que rara vez se efectúa la comprobación de la tarjeta con la patente, al cargar combustible.

DÉCIMO CUARTO: Que el contrato celebrado entre las partes es bilateral y oneroso, conforme a lo regulado en los artículo 1439 y 1440 del Código Civil.

En razón de esta última característica, a propósito de lo regulado en el inciso primero del artículo 1547 del cuerpo legal antes citado, es que el deudor es responsable de la culpa leve; que conforme a la definición dada por el inciso tercero del artículo 44 del mismo código, es *“la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.”*



Respecto a la prueba de la diligencia o cuidado, el artículo 1547 inciso tercero del Código Civil establece que ésta incumbe al que ha debido emplearlo.

Por su parte, el artículo 1546 del citado código dispone que *“Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella.”*

DÉCIMO QUINTO: Que de aquello que ha sido expuesto es preciso puntualizar, en primer lugar, que más allá de las asunciones de don Roberto Alejandro Rojas Guerrero -ejecutivo de ventas de Copec que instruyó la orden de otorgarse las TCT al actor sub lite-, de efectuar la entrega de las tarjetas a quien conocía como empleado de don Renentine Espinoza, no obra en el proceso autorización conferida por éste a persona alguna, con ese fin. Asimismo, mediando dicha entrega a un tercero –y por mucha confianza que se hubiera generado en torno a dicha persona-, se observa un actuar en contravención al artículo primero del reglamento del contrato en cuestión, en lo que respecta a la obligación de que *un representante autorizado del cliente* firmara las Tarjetas Copec Transporte en el momento de recibirlas. No figura aquel comprobante de entrega en autos, como ya fue anticipado.

Por otro lado, de los hechos manifestados por los terceros deponentes en la investigación penal ya aludida, los cuales fueron precedentemente reseñados en lo pertinente, se observa que los protocolos aplicables por COPEC ante ventas en que se paga con la TCT no resultan cumplidos en la misma forma por los diversos atendedores, no constando haber operado una supervisión que permita subsanar tal conducta.

A lo anterior debe sumarse la venta de combustible en bidones, que se tiene por acaecida en atención a tales declaraciones en correspondencia con los otros antecedentes de la causa; lo cual contraría la cláusula segunda del Contrato de Apertura de Crédito, en cuanto tales compraventa, efectuadas con cargo a la línea de crédito señalada, no fueron ni efectuadas por el cliente directamente, ni por otra personas autorizada por éste, ni en los vehículos especialmente autorizados por éste, y para los cuales se ha solicitado expresamente las “Tarjetas Copec Transportes”. Ello sin perjuicio de que el portador de las tarjetas conocía la clave secreta asignada a las mismas.



Así, no obstante la cláusula quinta del precedentemente citado reglamento establece la revisión de la patente del vehículo que se carga como un asunto facultativo de quien atiende, tratándose de tarjetas asociadas a una patente en específico, tal conducta se vuelve imperativa. Lo anterior, teniendo en especial consideración que no se trataba de operaciones en que quien cargara fuera la persona a nombre de quien se emitió la tarjeta o un tercero autorizado por éste.

DÉCIMO SEXTO: Que de lo expuesto se colige que la demandada ha omitido acreditar su diligencia respecto al cumplimiento del contrato sub lite, siendo de su carga hacerlo, conforme ya se indicó.

En dicho entendido, habrá de estarse a que COPEC no satisfizo el deber de cuidado de un buen padre de familia que le era exigible, lo que conduce a asentar que incurrió en un incumplimiento del contrato de apertura de línea de crédito celebrado con el actor; en relación a las disposiciones contractuales ya enunciadas. Tratándose de un incumplimiento culpable le resultan imputables tales acciones y omisiones a dicha parte.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, siendo la pretensión pretendida en el presente juicio por el actor la indemnización de los perjuicios que invoca, de acuerdo a las reglas generales que regulan la prueba, en particular el artículo 1698 del Código Civil, compete a éste acreditar la concurrencia de dichos daños a través de los medios probatorios que establece la ley.

Al efecto, se efectuará una distinción en cuanto al análisis de su procedencia respecto a los daños patrimoniales -daño emergente y lucro cesante- de los extrapatrimoniales -daño moral-.

DÉCIMO OCTAVO: Que el artículo 1556 del Código Civil dispone que la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya sea que provengan de no haberse cumplido la obligación, de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento.

El daño emergente constituye *“el empobrecimiento real y efectivo que sufre el patrimonio de una persona”* (Abeliuk Manasevich, René, “La Obligaciones” Tomo I, Quinta edición actualizada. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, p.248).



Por su parte, el lucro cesante consiste en *“la pérdida cierta de la ganancia probable, de modo que para su procedencia se requiere que quien pretende su reparación, debe acreditar los presupuestos necesarios para hacerlo procedente, es decir, la merma efectiva del beneficio o provecho que se habría obtenido en determinadas condiciones.”* (Considerando primero de sentencia de reemplazo de fecha 9 de noviembre de 2016, dictada por la Excelentísima Corte Suprema en causa rol N° 20.606-2016).

En el presente caso, más allá de no quedar claro en virtud de los argumentos contenidos en el cuerpo de la demanda del actor en qué consistirían estos daños, y de qué modo llegan a ascender al monto pretendido, en definitiva, debe estarse a que el demandante no rindió pruebas suficientes ni idóneas que permitan tener por establecida la existencia del daño patrimonial que acusa como sufrido por su parte.

Lo propio ocurre con el nexo causal, que debe ser directo, entre los daños esbozados con el incumplimiento de la demandada; lo cual no llega a observarse.

En ese sentido, no cabe sino rechazar el resarcimiento pretendido, por dichas partidas indemnizatorias, por no haberse dado debida cuenta por el actor de su procedencia.

DÉCIMO NOVENO: Que, en relación a la restante partida indemnizatoria pedida, el daño moral consiste en *“el sufrimiento, trastorno psicológico, afección espiritual o lesión de un interés personalísimo, causado a la espiritualidad de la víctima como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito o de la infracción a un derecho subjetivo, no definible por parámetros objetivos”* (Sentencia Excelentísima Corte Suprema, Rol de Ingreso N° 11458-2013).

Para efectos de su acreditación, resultan de relevancia la pericia psicológica practicada al demandado mediante especialista designado en autos, el certificado emitido por psicólogo que lo tratara con posterioridad a los sucesos de marras – entre fines de julio y septiembre de 2013- y las declaraciones de los testigos que depusieron en la presente causa.

En base a tales antecedentes probatorios, se tendrá como hecho de la causa que don Renentine Espinoza padece de un trastorno ansioso depresivo, en remisión, que afectó significativamente y a lo largo del tiempo su desenvolvimiento en las distintas esferas de su vida, contemplándose la familiar, social y laboral, en forma



negativa. Ello redundo en la existencia de un daño en la esfera extrapatrimonial del demandado.

A esto debe sumarse el descrédito que su inclusión en el Boletín Comercial significó para su desempeño en el rubro del transporte, con la consecuente limitación del crédito por instituciones prestadoras de tal servicio.

VIGÉSIMO: Que directamente ligado con lo expuesto en el considerando precedente, el último elemento cuya concurrencia se requiere para determinar la procedencia de la reparación de daños es la existencia de un nexo causal entre el incumplimiento culpable e imputable de la demandada y los perjuicios generados a la víctima.

Tratando aquella materia, es preciso atender a la alegación de la demandada referente a existir otras obligaciones impagas por parte del actor, respecto de acreedores distintos. En ese sentido, observando el informe de morosidad aparejado por el sujeto pasivo sub lite se desprende que existen obligaciones en favor de Banco Santander-Chile que vencieron con anterioridad a la factura emitida por Copec, en contra de don Renentine Espinoza. Sin perjuicio de aquello, es efectivo que la primera deuda en publicarse en el Boletín Comercial fue aquella cuyo acreedor es Copec, con fecha 10 de septiembre de 2013.

A mayor abundamiento, dentro de los fundamentos dados por el actor en lo que respecta al daño moral que sufrió, menciona la situación anormal y altamente traumática que constituyó para él verse envuelto en procesos judiciales por hechos respecto a los cuales se sentía ajeno e “inocente” de las situaciones que los fundaban; como es el juicio de cobro del pagaré por parte de COPEC, y los juicios penales, en que figura como víctima. En ese entendido, más allá de la deuda con COPEC que se le cobraba –en conjunto con las otras que tenía-, el incumplimiento contractual de la demandada, que facilitó e hizo posible las operaciones de carga de combustible en favor de un tercero, a costo de don Renentine Espinoza, subsumió a este en un sentir de indefensión, injusticia y resignación. De este modo, la depresión por él sufrida no es causada solo por un tema de morosidad económica –con COPEC y/o con terceros-, sino de todas sus reacciones asociadas al evento con COPEC; entidad que no obstante su negligencia –conforme se ha asentado en el proceso-, al manifestarle el cliente las irregularidades en las operaciones que le eran cobradas, el reclamo fue desestimado sin más.



VIGÉSIMO PRIMERO: Que conforme a lo expuesto, se tendrá por acreditada la relación de causalidad entre el daño moral padecido por el actor y el incumplimiento del contrato de apertura de línea de crédito en que incurrió COPEC.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, finalmente, para efectos de la evaluación del daño moral que se ha estimado como existente, se tendrá en especial consideración la gravedad del estado de depresión que sufrió el demandante, reflejado en que dejó de desarrollar completamente las actividades que constituían su vida habitual, así como en el cambio conductual que tuvo con sus conocidos, en especial con su familia. Resulta de especial relevancia en este punto la declaración de los testigos sub lite.

No obstante, más allá de asentarse en el peritaje que las “huellas” de aquel evento resultaban persistentes, no se aportaron probanzas en relación a cuan extenso en el tiempo fue tal padecimiento, con dichas características de gravedad. Ello, sin perjuicio de que el tratamiento con el psicólogo cuyo informe se acompañó en autos como prueba documental tuvo lugar por un poco más de dos meses, conforme se desprende del mérito de su certificado.

Asimismo, no obstante la ocupación del demandante no resulta intrascendente en cuanto a su incorporación en Boletín Comercial, en tanto tal hito conlleva ínsita una falta de confianza en la persona que en él figura, resulta efectivo que existen deudas adicionales a aquella cuyo cobro perseguía COPEC que situaron a don Renentine Espinoza en situación de ser agregado a tal nómina de morosidad. Vale decir entonces que sin perjuicio de ser el actor incorporado al Boletín Comercial por parte de COPEC, su mantención en el mismo no está dada solo por aquella deuda, cuyo cobro estimaba inicuo e improcedente.

Así, para la determinación del monto indemnizatorio debe tenerse en cuenta que en ningún caso puede constituir una ocasión de ganancia injusta para el demandante, sino un resarcimiento de los daños efectivamente padecidos. Es decir, en este caso, una estimación en dinero de los perjuicios extrapatrimoniales.

VIGÉSIMO TERCERO: Que concurriendo y habiéndose tenido por establecidos los presupuestos que hacen procedente la indemnización de los perjuicios antedichos -de carácter extrapatrimonial-, en sede contractual, se accederá a dicha reparación, en favor del actor, y de acuerdo al monto que se indicará en lo resolutivo.



VIGÉSIMO CUARTO: Que en nada altera lo razonado las demás probanzas rendidas.

De acuerdo a las consideraciones anteriores y a lo dispuesto en los artículos 1437 y siguientes; 1545 y siguientes; 1698 y siguientes del Código Civil; a los artículos 170; 253 y siguientes del Código de Procedimiento Civil;

SE RESUELVE:

I.- Que se **acoge parcialmente** la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta a fojas 1 y siguientes por don Héctor Gaspar Palacios Maray, en representación de don Renentine Antonio Espinoza Aravena, en contra de Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A., legalmente representada por don Lorenzo Gazmuri Schleyer, declarándose que se condena a la demandada al pago de \$5.000.000 por concepto de daño moral; rechazándose la acción en lo restante.

II.- Que se condena en costas a la demandada.

NOTIFIQUESE Y REGISTRESE.

C-24358-2015

DICTADA POR OSVALDO CORREA ROJAS, JUEZ TITULAR DEL DÉCIMO CUARTO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.

AUTORIZA LILIANA VERGARA MIRANDA, SECRETARIA SUBROGANTE DEL DECIMO CUARTO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil, en Santiago a 09 días del mes de enero del año dos mil diecinueve.

